

¿Reinventar las izquierdas?¹

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

La urgencia de izquierdas reflexivas

Cuando están en el poder, las izquierdas no tienen tiempo para reflexionar sobre las transformaciones que ocurren en la sociedad y, cuando lo hacen, es como reacción a cualquier acontecimiento que perturbe el ejercicio del poder. La respuesta siempre es defensiva. Cuando no están en el poder, se dividen internamente para definir quién será el líder en las próximas elecciones, de modo que las reflexiones y los análisis están relacionados con este objetivo.

Esta indisponibilidad para la reflexión, que siempre ha sido perniciosa, hoy es suicida. Por dos razones. La derecha tiene a su disposición a todos los intelectuales orgánicos del capital financiero, de las asociaciones empresariales, de las instituciones multilaterales, de los *think tanks* y de los grupos de presión, que le proporcionan a diario datos e interpretaciones que no son faltos de rigor y siempre interpretan la realidad llevando el agua a su molino. Por el contrario, las izquierdas no disponen de instrumentos de reflexión abiertos a los no militantes e, internamente, la reflexión sigue la línea estéril de las facciones.

1 Este capítulo es una versión con cambios menores de nueve de las “Onze cartas a las Izquierdas”, publicadas entre agosto del 2011 y junio del 2013. La octava carta fue traducida por Javier Lorca; las tercera, cuarta, quinta y sexta por Antoni Jesús Aguiló y revisadas por Àlex Tarradellas; las séptima y novena por Antoni Jesús Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez. Las décima y undécima fueron traducidas por Antoni Jesús Aguiló.

Hoy en día circula por el mundo una ola de informaciones y análisis que podrían tener una importancia decisiva para repensar y refundar las izquierdas tras el doble colapso de la socialdemocracia y el socialismo real. El desequilibrio entre las izquierdas y la derecha en relación con el conocimiento estratégico del mundo es hoy mayor que nunca.

La segunda razón es que las nuevas movilizaciones y militancias políticas por causas históricamente pertenecientes a las izquierdas se están realizando sin ninguna referencia a ellas (con excepción, tal vez, de la tradición anarquista) e incluso, muchas veces, en oposición a ellas. Esto no puede dejar de suscitar una profunda reflexión. ¿Se está haciendo esta reflexión? Tengo razones para creer que no y la prueba de ello está en los intentos de captar, educar, minimizar o ignorar a la nueva militancia.

Propongo algunas líneas de reflexión. La primera se refiere a la polarización social que está emergiendo de las enormes desigualdades sociales. Vivimos en una época que tiene algunas semejanzas con la de las revoluciones democráticas que convulsionaron Europa en 1848. La polarización social era entonces enorme porque el proletariado (en ese momento una clase joven) dependía del trabajo para sobrevivir, pero (a diferencia de lo que ocurría con los padres y abuelos) el trabajo no dependía de él, dependía de quien lo daba o quitaba a su arbitrio, es decir, del patrón; si uno trabajaba, los salarios eran tan bajos y la jornada tan larga que la salud peligraba y la familia vivía al borde del hambre; si era despedido, no tenía ningún tipo de apoyo, salvo el de alguna economía solidaria o el recurso a la delincuencia. No resulta extraño que en estas revoluciones las dos grandes banderas de lucha fueran el derecho al trabajo y el derecho a una jornada laboral más corta. Ciento cincuenta años después, la situación no es exactamente la misma, pero las banderas siguen siendo actuales.

Y probablemente hoy lo sean más de lo que lo eran hace treinta años. Las revoluciones fueron sangrientas y fracasaron, pero los gobiernos conservadores que siguieron tuvieron que hacer concesiones para que la cuestión social no desembocara en una catástrofe. ¿A qué distancia estamos nosotros de la catástrofe? Hasta ahora, la movilización contra la escandalosa desigualdad social (similar a la de 1848) es pacífica y tiene una fuerte tendencia moralista de denuncia.

Esto no asusta al sistema financiero-democrático. ¿Quién puede garantizar que siga así? La derecha está preparada para responder represivamente a cualquier alteración potencialmente amenazadora. ¿Qué planes tienen las izquierdas? ¿Volverán a dividirse como en el pasado, unas tomando la postura represora y otras la de la lucha contra la represión?

La segunda línea de reflexión también tiene mucho que ver con la revolución de 1848 y consiste en cómo volver a conectar la democracia con las aspiraciones y decisiones de los ciudadanos. Entre las consignas de 1848,

sobresalían liberalismo y democracia. Liberalismo significaba gobierno republicano, separación entre Estado y religión, libertad de prensa; democracia, por su parte, significaba sufragio “universal” para los hombres. Se ha avanzado mucho en este aspecto en ciento cincuenta años. Sin embargo, en los últimos treinta años las conquistas logradas han sido cuestionadas y la democracia parece más bien una casa cerrada y ocupada por un grupo de extraterrestres que decide democráticamente sus propios intereses y dictatorialmente los de las grandes mayorías. Un régimen mixto, una democradura.

El movimiento de los indignados y el movimiento *Occupy* rechazan la expropiación de la democracia y optan por tomar decisiones por consenso en sus asambleas. ¿Están locos o son un indicio de los retos que vienen por delante? ¿Ya han pensado las izquierdas que, si no se sienten cómodas con formas de democracia de alta intensidad (dentro de los partidos y en la república) deberían retirarse o refundarse?

Neocolonialismo y agonía de la democracia liberal

Las divisiones históricas entre las izquierdas se justificaron por una construcción ideológica imponente, pero en realidad su sostenibilidad práctica (la credibilidad de las propuestas políticas que les permitieron captar seguidores) se basó en tres factores: el colonialismo, que permitió desplazar la acumulación primitiva de capital (por desposesión violenta, en general ilegal y siempre impune, con incontables sacrificios humanos) fuera de los países capitalistas centrales, donde se libraban las luchas sociales consideradas decisivas; la emergencia de capitalismo nacional con características tan diferentes (capitalismo de Estado, corporativo, liberal, socialdemócrata) que daban verosimilitud a la idea de que habría varias alternativas para superar el capitalismo; y, por último, las transformaciones que las luchas sociales fueron produciendo en la democracia liberal, permitiendo alguna redistribución social y separando, hasta cierto punto, el mercado de las mercancías (los valores que tienen precio y se compran y venden) del mercado de las convicciones (las opciones y valores políticos que, por no tener precio, ni se compran ni se venden). Si para algunas izquierdas esta separación era un hecho nuevo, para otras era un engaño peligroso.

Sin embargo, en los últimos años estos factores han cambiado tan profundamente que nada será como antes para las izquierdas tal y como las conocemos. En lo que respecta al colonialismo, los cambios radicales son de dos tipos. Por un lado, la acumulación de capital por desposesión violenta ha vuelto a las antiguas metrópolis (robo de salarios y pensiones, transferencias ilegales de fondos colectivos para rescatar a bancos privados, total impunidad del gansterismo financiero). Es por ello que la lucha anticolonial también tendrá que librarse en ellas, una lucha que, como sabemos, nunca se pauteó

por las cortesías parlamentarias. Por otro lado, aunque el neocolonialismo (el mantenimiento de las relaciones coloniales entre las antiguas colonias y metrópolis o sus sustitutos, como el caso de Estados Unidos) ha permitido hasta hoy la continuidad de la acumulación por desposesión en el antiguo mundo colonial, parte de él está asumiendo un nuevo protagonismo (India, Brasil, Sudáfrica y el caso especial de China, humillada por el imperialismo occidental durante el siglo XIX), hasta el punto de que no sabemos si habrá nuevas metrópolis y, por tanto, nuevas colonias.

Las izquierdas del Norte global (y salvo algunas excepciones, también las de América Latina) empezaron siendo colonialistas y más tarde aceptaron acriticamente que la independencia de las colonias eliminaba el colonialismo, desvalorizando así la emergencia del neocolonialismo y el colonialismo interno. ¿Serán capaces de imaginarse como izquierdas frente a nuevos colonialismos y de prepararse para luchas anticoloniales de nuevo tipo?

En cuanto a los capitalismo nacionales, su final parece estar marcado por la trituradora del neoliberalismo. Es cierto que en América Latina y China parece que están emergiendo nuevas versiones de dominación capitalista, pero curiosamente se aprovechan de las oportunidades que el neoliberalismo les confiere. No obstante, el 2011 ha demostrado que la izquierda y el neoliberalismo son incompatibles. Solo hay que ver cómo las cotizaciones bursátiles suben en la misma medida en que aumenta la desigualdad social y se destruye la protección social. ¿Cuánto tardarán las izquierdas en extraer conclusiones?

Finalmente, la democracia liberal agoniza bajo el peso de los poderes fácticos (las mafias, la masonería, el Opus Dei, las transnacionales, el FMI, el Banco Mundial, etc.), la impunidad de la corrupción, el abuso de poder y el tráfico de influencias. El resultado es una fusión creciente entre el mercado político de las ideas y el mercado económico de los intereses. Todo está en venta y solo no se vende más porque no hay quien lo compre. En los últimos cincuenta años, las izquierdas (todas) han contribuido a que la democracia liberal disponga de una cierta credibilidad entre las clases populares y a que los conflictos sociales se puedan resolver en paz. Como a la derecha solo le interesa la democracia en la medida en que sirve a sus intereses, las izquierdas son hoy la garantía de su rescate. ¿Estarán a la altura del reto? ¿Tendrán el coraje de refundar la democracia más allá del liberalismo? ¿Defenderán una democracia sólida contra la antidemocracia, que combine la democracia representativa con la democracia participativa y la directa? ¿Abogarán por una democracia anticapitalista frente a un capitalismo cada vez más antidemocrático?

Democratizar, desmercantilizar, descolonizar

¿Por qué la actual crisis del capitalismo fortalece a quienes la han causado?
¿Por qué la racionalidad de la “solución” a la crisis se basa en las previsiones

que hacen y no en las consecuencias, que casi siempre las desmienten? ¿Por qué es tan fácil para el Estado reemplazar el bienestar de los ciudadanos por el bienestar de los bancos? ¿Por qué la gran mayoría de los ciudadanos asiste a su empobrecimiento y al enriquecimiento escandaloso de unos pocos como algo necesario e inevitable para evitar que la situación empeore? ¿Por qué la estabilidad de los mercados financieros solo es posible a costa de la inestabilidad de la vida de la mayoría de la población? ¿Por qué los capitalistas, en general, individualmente son gente de bien y el capitalismo, en su conjunto, es amoral? ¿Por qué el crecimiento económico es hoy la panacea para todos los males de la economía y la sociedad sin que se pregunte si los costes sociales y ambientales son o no sostenibles? ¿Por qué Malcolm X tenía razón cuando advirtió: “Si no tenéis cuidado, los periódicos os convencerán de que la culpa de los problemas sociales es de los oprimidos y no de los opresores”? ¿Por qué las críticas de las izquierdas al neoliberalismo entran en los noticieros con la misma rapidez e irrelevancia con la que salen? ¿Por qué son tan escasas las alternativas cuando son más necesarias?

Estas preguntas deberían formar parte de la agenda de reflexión política de las izquierdas, o pronto serán remitidas al museo de las felicidades pasadas. Ello no sería grave si no significara, como significa, el fin de la felicidad futura de las clases populares. La reflexión debería partir de aquí: el neoliberalismo es, ante todo, una cultura del miedo, del sufrimiento y la muerte para las grandes mayorías; no es posible combatirlo con eficacia sin oponerle una cultura de la esperanza, la felicidad y la vida. La dificultad que las izquierdas tienen para asumirse como portadoras de esta otra cultura resulta de haber caído durante mucho tiempo en la trampa que las derechas siempre han utilizado para mantenerse en el poder: reducir la realidad a lo que existe, por más injusto y cruel que sea, para que la esperanza de las mayorías parezca irreal. El miedo en la espera mata la esperanza en la felicidad. Contra esta trampa es necesario partir de la idea de que la realidad es la suma de lo que existe y de todo lo que en ella está emergiendo como posibilidad y como lucha por su concreción. Si no son capaces de detectar las emergencias, las izquierdas pueden sucumbir o acabar en el museo, lo que a efectos prácticos es lo mismo.

Este es el nuevo punto de partida de las izquierdas, la nueva base común que después les permitirá divergir con fraternidad en las respuestas que den a las preguntas formuladas. Una vez ampliada la realidad sobre la que hay que actuar políticamente, las propuestas de las izquierdas deben resultar creíbles para las grandes mayorías como prueba de que es posible luchar contra la supuesta fatalidad del miedo, del sufrimiento y la muerte en nombre del derecho a la esperanza, la felicidad y la vida. Esta lucha debe orientarse por tres principios clave: democratizar, desmercantilizar y descolonizar.

Democratizar la democracia, porque la actual se ha dejado secuestrar por poderes antidemocráticos. Es necesario evidenciar que una decisión tomada

democráticamente no puede quedar anulada el día siguiente por una agencia de calificación o por una bajada en la cotización de las bolsas (como podría suceder dentro de poco tiempo en Francia).

Desmercantilizar significa mostrar que usamos, producimos e intercambiamos mercaderías, pero que no somos mercaderías ni aceptamos relacionarnos con los demás y con la naturaleza como si solo fuésemos una mercancía más. Antes que empresarios o consumidores somos ciudadanos y, para ello, es necesario suscribir el imperativo de que no todo se compra ni se vende, que hay bienes públicos y bienes comunes como el agua, la salud y la educación.

Descolonizar significa erradicar de las relaciones sociales la autorización para dominar a los otros bajo el pretexto de que son inferiores: porque son mujeres, porque tienen un color de piel diferente, o porque profesan una religión “extraña”.

El modelo de desarrollo

Históricamente, las izquierdas se dividieron en torno a los modelos de socialismo y sus vías de realización. Puesto que el socialismo no forma parte, por ahora, de la agenda política (incluso en América Latina la discusión sobre el socialismo del siglo XXI pierde fuerza), las izquierdas parecen dividirse en torno a los modelos de capitalismo. A primera vista, esta división tiene poco sentido porque, por un lado, actualmente hay un modelo global de capitalismo, desde hace tiempo hegemónico, dominado por la lógica del capital financiero, basado en la búsqueda del máximo beneficio en el menor tiempo posible, sean cuales sean los costes sociales o el grado de destrucción de la naturaleza. Por otro lado, la disputa en torno a los modelos de capitalismo debería ser más una controversia abierta entre las derechas que entre las izquierdas. Sin embargo, no es así. A pesar de su globalidad, las características del modelo de capitalismo dominante varían en distintos países y regiones del mundo y las izquierdas tienen un interés vital en discutirlos, no solo porque están en juego las condiciones de vida, aquí y ahora, de las clases populares, que son el soporte político de las izquierdas, sino también porque la lucha por horizontes poscapitalistas (a los que algunas izquierdas no han renunciado) dependerá mucho del capitalismo real del que se parta.

Dado el carácter global del capitalismo, el análisis de los diferentes contextos debe tener en cuenta que, a pesar de sus diferencias, ellos forman parte del mismo texto. De este modo, la actual disyunción entre las izquierdas europeas y las de otros continentes, principalmente las izquierdas latinoamericanas, es perturbadora. Mientras las izquierdas europeas parecen estar de acuerdo en que el crecimiento es la solución a todos los males de Europa, las izquierdas latinoamericanas están profundamente divididas sobre el crecimiento y el modelo de desarrollo en el que se basa. Veamos el contraste. Las izquierdas europeas parecen haber descubierto que la apuesta por el crecimiento eco-

nómico es lo que las distingue de las derechas, instaladas en la consolidación presupuestaria y la austeridad.

Crecimiento significa empleo y este, a su vez, mejora de las condiciones de vida de la mayoría. No problematizar el crecimiento implica la idea de que cualquier crecimiento es bueno. Se trata de una idea suicida para las izquierdas. Por un lado, las derechas la aceptan con facilidad (tal y como están haciendo, porque están convencidas de que será su tipo de crecimiento el que prevalezca). Por otro, significa un grave retroceso histórico en relación con los avances de las luchas ecológicas de las últimas décadas, en las que algunas izquierdas del Sur y del Norte tuvieron un papel determinante. Es decir, se omite que el modelo de crecimiento dominante es insostenible. En pleno período preparatorio de la Conferencia de la ONU Río+20, no se hablaba de sostenibilidad, como tampoco se cuestionaba el concepto de “economía verde” a pesar de que, más allá del color de los billetes de dólar, resulte difícil imaginar un capitalismo verde.

En contraste, en América Latina las izquierdas están polarizadas como nunca en torno al modelo de crecimiento y de desarrollo. La voracidad de China, el consumo digital sediento de metales raros y la especulación financiera sobre la tierra, las materias primas y los bienes alimentarios están provocando una carrera sin precedentes por los recursos naturales: explotación minera de gran escala a cielo abierto, explotación petrolera, expansión de la frontera agrícola. El crecimiento económico propiciado por esta carrera colisiona con el aumento exponencial de la deuda socioambiental: apropiación y contaminación del agua, expulsión de millares de campesinos pobres y de pueblos indígenas de sus territorios ancestrales, deforestación, destrucción de la biodiversidad, ruina de modos de vida y de economías que hasta ahora parecían garantizar la sostenibilidad.

Desafiada ante tal contradicción, una parte de las izquierdas opta por la oportunidad extractivista con la premisa de que los rendimientos generados se orienten a reducir la pobreza y construir infraestructura. La otra parte, en cambio, entiende el nuevo extractivismo como la fase colonial más reciente por la cual América Latina está condenada a ser exportadora de naturaleza hacia los centros imperiales que saquean las inmensas riquezas y destruyen los modos de vida y las culturas de los pueblos. La disputa es tan intensa que incluso pone en tensión la estabilidad política de países como Bolivia y Ecuador.

La discrepancia entre las izquierdas europeas y las izquierdas latinoamericanas reside en el hecho de que solo las primeras suscribieron incondicionalmente el “pacto colonial” según el cual los avances del capitalismo valen por sí mismos, aunque hayan sido (y continúen siendo) obtenidos a costa de la opresión colonial de los pueblos extraeuropeos. Así, nada nuevo se presenta en el frente occidental en cuanto sea posible externalizar la miseria humana y la destrucción de la naturaleza.

Para superar este contraste y avanzar en la construcción de alianzas transcontinentales son necesarias dos condiciones. Por una parte, las izquierdas europeas deberían objetar el consenso del crecimiento que, o es falso, o significa la complicidad repugnante con una larguísima injusticia histórica. Asimismo, deberían discutir la cuestión de la insostenibilidad y poner en causa tanto el mito del crecimiento infinito como la idea de la inagotable disponibilidad de la naturaleza en que se asienta, asumiendo que los crecientes costes socioambientales del capitalismo no son superables con imaginarias economías verdes. Por último, deberían defender que la prosperidad y la felicidad de la sociedad dependen menos del crecimiento que de la justicia social y de la racionalidad ambiental; y tener el coraje de afirmar que la lucha por la reducción de la pobreza es una burla para disfrazar la lucha, que no se quiere entablar, contra la concentración de la riqueza.

Por su parte, las izquierdas latinoamericanas deberían discutir las antinomias entre el corto y el largo plazo, teniendo en mente que el futuro de las rentas diferenciales generadas hoy por la explotación de los recursos naturales está bajo control de pocas empresas multinacionales y que, al final de este ciclo extractivista, los países podrían quedar más empobrecidos y dependientes que nunca. Deberían reconocer también que el nacionalismo extractivista garantiza para el Estado recetas que podrían tener una importante utilidad social solo si son empleadas, al menos en parte, para financiar una política de transición del actual extractivismo depredador a una economía plural en la cual el extractivismo únicamente será útil en la medida en que sea indispensable. Esta transición debería comenzar de inmediato.

Las condiciones para políticas de convergencia global son exigentes pero no imposibles, y expresan opciones que no deben ser descartadas bajo pretexto de ser políticas de lo imposible. La cuestión no está en optar entre la política de lo posible o la política de lo imposible. Está en saber situarse, siempre, en el lado izquierdo de lo posible.

Cambio de paradigma

¿A qué izquierdas me dirijo? A los partidos y movimientos sociales que luchan contra el capitalismo, el colonialismo, el racismo, el sexismo y la homofobia, y a toda la ciudadanía que, sin estar organizada, comparte los objetivos y aspiraciones de quienes se organizan para luchar contra estos fenómenos. Es un público muy amplio, sobre todo porque incluye a quienes llevan a cabo prácticas de izquierda sin considerarse de izquierda. Y, sin embargo, parece tan pequeño.

Ante la Conferencia de Naciones Unidas Río+20 y la Cumbre de los Pueblos celebradas en Río de Janeiro en 2012 las izquierdas tuvieron la oportunidad de experimentar la riqueza global de las alternativas que ofrecen y de identificar

bien las fuerzas de derecha a las que se oponen. Por desgracia, esta oportunidad fue desperdiciada. En Europa, las izquierdas estaban avasalladas por las crisis y urgencias de lo inmediato y, en otros continentes, los medios de comunicación ocultaban lo novedoso y de izquierda que flotaba en el ambiente.

Me refiero a la Conferencia que tuvo lugar en Barra de Tijuca y la Cumbre en el parque de Flamengo. Eran pocos los kilómetros que separaban ambos eventos, pero había un océano de distancia política entre ellos. En Barra se encontraban los gobiernos y la sociedad civil obediente, incluyendo las empresas multinacionales que cocinaban los discursos y organizaban el cerco a los negociadores oficiales. Allí la derecha mundial dio un espectáculo macabro de arrogancia y cinismo ante los desafíos ineludibles que plantea la sostenibilidad de la vida en el planeta. Ningún compromiso vinculante para reducir los gases del efecto invernadero, ninguna responsabilidad diferenciada para los países que más contaminan, ningún fondo para el desarrollo sostenible, ningún derecho de acceso universal a la salud, ninguna suspensión de patentes farmacéuticas en situaciones de emergencia y pandemias. En lugar de ello, la economía verde, el caballo de Troya del capital financiero para gestionar los bienes globales y los servicios que la naturaleza nos presta gratuitamente. Cualquier ciudadano con conciencia ecológica entiende que la manera de defender la naturaleza no es venderla y no cree que los problemas del capitalismo puedan resolverse con más capitalismo. Pero eso fue lo que los medios de comunicación llevaron al mundo.

Por el contrario, la Cumbre de los Pueblos fue la expresión de la riqueza del pensamiento y las prácticas impulsadas por movimientos sociales de todo el mundo para lograr que las generaciones futuras disfruten del planeta en, al menos, las mismas condiciones de las que disponemos.

Hubo millares de personas, centenares de eventos, un conjunto inagotable de prácticas y de propuestas de sostenibilidad. Algunos ejemplos: defensa de los espacios públicos en las ciudades que prioricen lo peatonal, la convivencia social, la vida asociativa, con gestión democrática y participación popular, transportes colectivos, huertos comunitarios y plazas sensoriales;² economía cooperativa y solidaria; soberanía alimentaria, agricultura familiar y educación para la alimentación sin el uso de agrotóxicos; nuevo paradigma de producción-consumo que fortalezca las economías locales articuladas translocalmente; sustitución del PIB por indicadores que incluyan la economía del cuidado, la salud colectiva, la sociedad decente y la prosperidad no asentada en el consumo compulsivo; cambio en la matriz energética basada en las energías renovables descentralizadas; sustitución del concepto de capital natural por la naturaleza como sujeto de derechos; defensa de los bienes comunes,

2 Se trata de un proyecto innovador cuya finalidad principal es atender a personas ciegas o con necesidades visuales especiales para promover, más allá de la visión, el aprendizaje a través de experiencias sonoras, táctiles y olfativas (N. del T.).

como el agua y la biodiversidad, que solo permiten derechos de uso temporal; garantía del derecho a la tierra y al territorio de las poblaciones campesinas e indígenas; democratización de los medios de comunicación; tributación que penalice las actividades extractivas y a las industrias contaminantes; derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres; reforma democrática del Estado que elimine la pandemia de la corrupción e impida la transformación en curso del Estado protector en Estado depredador; transferencias de tecnología que atenúen la deuda ecológica.

Si quieren tener futuro, las izquierdas deben adoptar el futuro contenido en estas propuestas y transformarlas en políticas públicas.

Los derechos humanos: la última trinchera

¿Quién podría haber imaginado hace unos años que partidos y gobiernos considerados progresistas o de izquierda abandonarían la defensa de los derechos humanos más básicos, por ejemplo el derecho a la vida, al trabajo y a la libertad de expresión y de asociación, en nombre de los imperativos del “desarrollo”? ¿Acaso no fue a través de la defensa de esos derechos que consiguieron el apoyo popular y llegaron al poder? ¿Qué ocurre para que el poder, una vez conquistado, vire tan fácil y violentamente en contra de quienes lucharon por encumbrar ese poder? ¿Por qué razón, siendo un poder de las mayorías más pobres, es ejercido en favor de las minorías más ricas? ¿Por qué es que, en este aspecto, es cada vez más difícil distinguir entre los países del Norte y los países del Sur?

En lo que va del Siglo XXI, los partidos socialistas de varios países europeos (Grecia, Portugal y España) mostraron que podían cuidar tan bien los intereses de los acreedores y los especuladores internacionales como cualquier partido de derecha, haciendo aparecer como algo normal que los derechos de los trabajadores fuesen expuestos a la cotización de las Bolsas de Valores y, por lo tanto, devorados por ellos. En Sudáfrica, la policía al servicio del gobierno del ANC (Congreso Nacional Africano), que luchó contra el *apartheid* en nombre de las mayorías negras, mata a 34 mineros en huelga para defender los intereses de una empresa minera inglesa. Cerca de allí, en Mozambique, el gobierno del FRELIMO (Frente de Liberación), que condujo la lucha contra el colonialismo portugués, atrae la inversión de empresas extractivistas con la exención de impuestos y la oferta de docilidad (por las buenas o por las malas) de las poblaciones que están siendo afectadas por la minería a cielo abierto. En la India, el gobierno del Partido del Congreso, que luchó contra el colonialismo inglés, concede tierras a empresas nacionales y extranjeras y ordena la expulsión de miles y miles de campesinos pobres, destruyendo sus medios de subsistencia y provocando un enfrentamiento armado. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales, un indígena llevado al poder por el movimiento

indígena, impone sin consulta previa y con una sucesión rocambolesca de medidas y contramedidas la construcción de una ruta en territorio indígena (Parque Nacional Tipnis) para explotar recursos naturales. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa, que con coraje concede asilo político a Julián Assange, acaba de ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no garantizar los derechos del pueblo indígena Sarayaku, en lucha contra la exploración petrolera en sus territorios. Ya en mayo de 2003 la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) le había solicitado a Ecuador medidas cautelares en favor del pueblo Sarayaku que no fueron atendidas.

En 2011, la CIDH le solicitó a Brasil, mediante una medida cautelar, que suspendiera de inmediato la construcción de la represa de Belo Monte (que, de completarse, será la tercera más grande del mundo) hasta que fueran adecuadamente consultados los pueblos indígenas afectados. Brasil protestó contra la decisión, retiró a su embajador en la OEA y suspendió el pago de su cuota anual en la organización, retiró a su candidato a la CIDH y tomó la iniciativa de crear un grupo de trabajo para proponer una reforma de la Comisión, en el sentido de disminuir sus poderes para cuestionar a los gobiernos respecto de violaciones a los derechos humanos. Curiosamente, la suspensión de la construcción de la represa acaba de ser resuelta por el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (Brasilia), por la falta de estudios de impacto ambiental.

Para responder a las preguntas con las que comencé este acápite, veamos lo que comparten todos estos casos. Todas estas violaciones a los derechos humanos están relacionadas con el neoliberalismo, la versión más antisocial del capitalismo en los últimos cincuenta años. En el Norte, el neoliberalismo impone la austeridad a las grandes mayorías y el rescate de los banqueros, sustituyendo la protección social de los ciudadanos por la protección social del capital financiero. En el Sur, el neoliberalismo impone su avidez por los recursos naturales, sean los minerales, el petróleo, el gas natural, el agua o la agroindustria. Los territorios pasan a ser solo tierra y las poblaciones que los habitan, obstáculos al desarrollo que es necesario remover cuanto más rápido mejor. Para el capitalismo extractivista, la única regulación verdaderamente aceptable es la autorregulación, la cual incluye, casi siempre, la autorregulación de la corrupción de los gobiernos. Honduras ha ofrecido uno de los ejemplos más extremos de autorregulación de la actividad minera, donde todo queda entre la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial y la embajada de Canadá. Sí, Canadá, que parecía una fuerza benévola en las relaciones internacionales y ha pasado a ser uno de los más agresivos promotores del imperialismo minero.

Cuando la democracia concluya que no es compatible con este tipo de capitalismo y decida resistírsele, quizá sea demasiado tarde. Puede que, entre tanto, el capitalismo haya concluido que la democracia no es compatible con él.

Al contrario de lo que pretende el neoliberalismo, el mundo solo es lo que es porque nosotros queremos. Puede ser de otra manera, si nos lo proponemos. La situación actual es tan grave que es necesario tomar medidas urgentes, aunque sean pequeños pasos. Esas medidas varían de país a país y de continente a continente, pese a que es indispensable articularlas cuando sea posible. En el continente americano, al momento de escribir este trabajo, la medida más urgente es trabar el avance de la reforma de la CIDH. En esa reforma están siendo activos países con los que soy solidario en múltiples aspectos de sus gobiernos: Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina. Pero en el caso de la reforma de la CIDH estoy firmemente del lado de los que luchan contra la iniciativa de estos gobiernos y por el mantenimiento del estatuto actual de la Comisión. No deja de ser irónico que los gobiernos de derecha que más han hostilizado al sistema interamericano de derechos humanos, como el caso de Colombia, asistan deleitados al servicio que, objetivamente, les están prestando los gobiernos progresistas.

Mi primer llamado es a los gobiernos de Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina para que abandonen el proyecto de reforma. Y especialmente a Brasil, debido a la influencia que tiene en la región. Si tienen una mirada política de largo plazo, no les será difícil concluir que serán ellos y las fuerzas sociales que los han apoyado quienes, en el futuro, más podrían beneficiarse con el prestigio y la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos. Por cierto, la Argentina debe a la CIDH y a la Corte la doctrina que permitió llevar a la Justicia los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, que con sumo acierto se convirtió en bandera de los gobiernos de los Kirchner en sus políticas de derechos humanos.

Pero, como la ceguera del corto plazo puede prevalecer, llamo también a todos los militantes de derechos humanos del continente y a todas las organizaciones y los movimientos sociales —que vuelcan en el Foro Social Mundial y en la lucha contra el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) la fuerza de la esperanza organizada— a unirse para enfrentar la reforma de la CIDH que está en curso. Sabemos que el sistema interamericano de derechos humanos está lejos de ser perfecto, sin ir más lejos porque los dos países más poderosos de la región (Estados Unidos y Canadá) ni siquiera firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sabemos además que, en el pasado, tanto la Comisión como la Corte revelaron debilidades y selectividades políticamente sesgadas. Pero también sabemos que el sistema y sus instituciones se han fortalecido, actuando con mayor independencia y ganando prestigio a través de la eficacia con la que han condenado numerosas violaciones a los derechos humanos: desde los años 70 y 80, cuando la Comisión llevó a cabo misiones en países como Chile, Argentina y Guatemala, y publicó informes denunciando los crímenes cometidos por las dictaduras militares, hasta las misiones y denuncias después del golpe de Estado en Honduras en 2009,

para no mencionar las reiteradas solicitudes para que se clausure el centro de detención de Guantánamo. A su vez, la reciente decisión de la Corte en el caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku versus Ecuador”, del 27 de julio pasado, marca un hito histórico para el derecho internacional, no solo a nivel continental, sino también mundial. Tal como la sentencia en el caso “Atala Riffo y niñas versus Chile”, sobre discriminación por razones de orientación sexual. ¿Y cómo olvidar la intervención de la CIDH sobre la violencia doméstica en Brasil, que condujo a la promulgación de la Ley Maria da Penha?

Los datos están echados. A espaldas de la CIDH y con fuertes limitaciones a la participación de los organismos de derechos humanos, el Consejo Permanente de la OEA prepara una serie de recomendaciones para buscar su aprobación en la Asamblea General Extraordinaria, a más tardar en marzo de 2013 (hasta el 30 de septiembre los Estados presentarán sus propuestas). Por lo que se sabe, todas las recomendaciones apuntan a limitar el poder de la CIDH para interpelar a los Estados por violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo: dedicar más recursos a la promoción de los derechos humanos y menos a la investigación de las violaciones, acortar los plazos de investigación para que se vuelva imposible realizar análisis cuidadosos, eliminar del informe anual la referencia a países cuya situación en materia de derechos humanos merezca una atención especial, limitar la emisión y la extensión de las medidas cautelares, terminar con el informe anual sobre libertad de expresión, impedir pronunciamientos sobre violaciones que parecen inminentes pero que aún no se han concretado.

A los militantes por los derechos humanos y a todos los ciudadanos preocupados por el futuro de la democracia cabe ahora trabar ese proceso.

Ante la coyuntura: la izquierda europea

Europa será en 2013 un desastre en el plano social e imprevisible en el plano político. ¿Lograrán los gobiernos europeos, en especial los del sur, crear la estabilidad que les permita terminar el mandato o habrá crisis políticas que les obliguen a convocar elecciones anticipadas? Digamos que cada una de estas hipótesis tiene un 50% de probabilidad. Siendo así, es preciso que los ciudadanos tengan la certeza de que la inestabilidad política que pueda generarse es el precio a pagar para que surja una alternativa de poder y no solo una alternancia en el poder. ¿Podrán construir las izquierdas esta alternativa? Sí, pero únicamente si se transforman y unen, lo que es exigir mucho en poco tiempo.

Ofrezco mi contribución para la creación de dicha alternativa. En primer lugar, las izquierdas deben centrarse en el bienestar de la ciudadanía y no en las posibles reacciones de los acreedores. La historia muestra que el capital financiero y las instituciones multilaterales (FMI, BCE, BM, Comisión Europea)

solo son rígidos en la medida en que las circunstancias no los obligan a ser flexibles. En segundo lugar, lo que históricamente une a las izquierdas es la defensa del Estado social fuerte: educación pública obligatoria y gratuita, servicio estatal de salud universal que tienda a la gratuidad, seguridad social sostenible con sistema de pensiones basado en el principio de repartición y no en el de capitalización, bienes estratégicos o monopolios naturales (agua, correos) nacionalizados.

Las diferencias entre las izquierdas son importantes, pero no impiden esta convergencia de base que siempre condicionó las preferencias electorales de las clases populares. Es cierto que la derecha también contribuyó al Estado social (basta recordar a Bismarck en Prusia), pero siempre presionada por las izquierdas y reculó cuando la presión disminuyó, como es el caso, desde hace treinta años, en Europa. La defensa del Estado social fuerte debe ser la mayor prioridad y debe condicionar el resto. El Estado social no es sostenible sin desarrollo. En ese sentido, si bien habrá divergencias acerca del peso de la ecología, de la ciencia o de la flexiseguridad en el trabajo, el acuerdo de fondo sobre el desarrollo es inequívoco y constituye, por tanto, la segunda prioridad para unir a las izquierdas. Como la salvaguarda del Estado social es prioritaria, todo debe hacerse para garantizar la inversión y la creación de empleo.

Y aquí surge la tercera prioridad que deberá unir a las izquierdas. Si para garantizar el Estado social y el desarrollo es necesario renegociar con la troika y los otros acreedores, entonces esa renegociación debe ser hecha con determinación. Es decir, la jerarquía de las prioridades muestra con claridad que no es el Estado social el que debe adaptarse a las condiciones de la troika; al contrario, deben ser estas las que se adaptan a la prioridad de mantener el Estado social. Este es un mensaje que tanto los ciudadanos como los acreedores entenderán bien, aunque por diferentes razones.

Para que la unidad entre las izquierdas tenga éxito político, hay que considerar tres factores: riesgo, credibilidad y oportunidad. En cuanto al riesgo, es importante mostrar que los riesgos no son superiores a los que los ciudadanos europeos ya están corriendo: los del sur, un mayor empobrecimiento encadenado a la condición de periferia, abasteciendo mano de obra barata a la Europa desarrollada; y todos en general, pérdida progresiva de derechos en nombre de la austeridad, mayor desempleo, privatizaciones, democracias rehenes del capital financiero. El riesgo de la alternativa es un riesgo calculado con el propósito de probar la convicción con la que está siendo salvaguardado el proyecto europeo.

La credibilidad radica, por un lado, en la convicción y la seriedad con las que se formula la alternativa y en el apoyo democrático con que se cuenta; y, por otro, en haber mostrado la capacidad de hacer sacrificios de buena fe (Grecia, Irlanda y Portugal son un ejemplo de ello). Únicamente no se aceptan

sacrificios impuestos de mala fe, sacrificios impuestos como máximos apenas para abrir caminos a otros sacrificios mayores.

Y la oportunidad está ahí para ser aprovechada. La indignación generalizada y expresada masivamente en calles, plazas, redes sociales, centros de trabajo, salud y estudios, entre otros espacios, no se ha plasmado en un bloque social a la altura de los retos que plantean las circunstancias. El actual contexto de crisis requiere una nueva política de frentes populares a escala local, estatal y europea formados por una pluralidad heterogénea de sujetos, movimientos sociales, ONG, universidades, instituciones públicas, gobiernos, entre otros actores que, unidos en su diversidad, sean capaces, mediante formas de organización, articulación y acción flexibles, de lograr una notable unidad de acción y propósitos.

El objetivo es unir a las fuerzas de izquierdas en alianzas democráticas estructuralmente similares a las que constituyeron la base de los frentes antifascistas durante el período de entreguerras, con el que existen semejanzas perturbadoras. Dos de ellas deben ser mencionadas: la profunda crisis financiera y económica y las abrumadoras patologías de la representación (crisis generalizada de los partidos políticos y su incapacidad para representar los intereses de las clases populares) y de la participación (el sentimiento de que votar no cambia nada). El peligro del fascismo social y sus efectos, cada vez más sentidos, hace necesaria la formación de frentes capaces de luchar contra la amenaza fascista y movilizar las energías democráticas adormecidas de la sociedad. Al inicio del siglo XXI, estos frentes deben emerger desde abajo, desde la politización más articulada de la indignación que fluye en nuestras calles.

Esperar sin esperanza es la peor maldición que puede caer sobre un pueblo. Y la esperanza no se inventa: se construye con inconformismo, rebeldía competente y alternativas reales a la situación presente.

Los dos desafíos principales

Primero: ¿democracia o capitalismo?

Al inicio del tercer milenio, las izquierdas se debaten entre dos desafíos principales: la relación entre democracia y capitalismo, y el crecimiento económico infinito (capitalista o socialista) como indicador básico de desarrollo y progreso. Comienzo por el primer desafío.

Contra lo que el sentido común de los últimos cincuenta años puede hacernos pensar, la relación entre democracia y capitalismo siempre fue una relación tensa, incluso de contradicción. Lo fue, ciertamente, en los países periféricos del sistema mundial, en lo que durante mucho tiempo se denominó Tercer Mundo y hoy se designa como Sur global. Pero también en los países

centrales o desarrollados la misma tensión y contradicción estuvieron siempre presentes. Basta recordar los largos años de nazismo y fascismo.

Un análisis más detallado de las relaciones entre capitalismo y democracia obligaría a distinguir entre diferentes tipos de capitalismo y su dominio en distintos periodos y regiones del mundo, y entre diferentes tipos y grados de intensidad de la democracia. En estas líneas concibo al capitalismo bajo su forma general de modo de producción y hago referencia al tipo que ha dominado en las últimas décadas: el capitalismo financiero. En lo que respecta a la democracia, me centro en la democracia representativa tal como fue teorizada por el liberalismo.

El capitalismo solo se siente seguro si es gobernado por quien tiene capital o se identifica con sus “necesidades”, mientras que la democracia es idealmente el gobierno de las mayorías que no tienen capital ni razones para identificarse con las “necesidades” del capitalismo, sino todo lo contrario. El conflicto es, en el fondo, un conflicto de clases, pues las clases que se identifican con las necesidades del capitalismo (básicamente, la burguesía) son minoritarias en relación con las clases que tienen otros intereses, cuya satisfacción colisiona con las necesidades del capitalismo (clases medias, trabajadores y clases populares en general). Al ser un conflicto de clases, se presenta social y políticamente como un conflicto distributivo: por un lado, la pulsión por la acumulación y la concentración de riqueza por parte de los capitalistas, y, por otro, la reivindicación de la redistribución de la riqueza generada en gran parte por los trabajadores y sus familias. La burguesía siempre ha tenido pavor a que las mayorías pobres tomen el poder y ha usado el poder político que le concedieron las revoluciones del siglo XIX para impedir que eso ocurra. Ha concebido la democracia liberal como el modo de garantizar eso mismo a través de medidas que cambiaron en el tiempo, pero mantuvieron su objetivo: restricciones al sufragio, primacía absoluta del derecho de propiedad individual, sistema político y electoral con múltiples válvulas de seguridad, represión violenta de la actividad política fuera de las instituciones, corrupción de los políticos, legalización del lobby... Y siempre que la democracia se mostró disfuncional, se mantuvo abierta la posibilidad del recurso a la dictadura, algo que sucedió muchas veces.

Después de la Segunda Guerra Mundial, muy pocos países tenían democracia, vastas regiones del mundo estaban sometidas al colonialismo europeo, que servía para consolidar el capitalismo euro-norteamericano. Europa estaba devastada por una guerra que había sido provocada por la supremacía alemana, y en el Este se consolidaba el régimen comunista, que aparecía como alternativa al capitalismo y a la democracia liberal. En este contexto surgió en la Europa más desarrollada el llamado “capitalismo democrático”, un sistema de economía política basado en la idea de que, para ser compatible con la democracia, el capitalismo debería ser fuertemente regulado, lo que

implicaba la nacionalización de sectores clave de la economía, un sistema tributario progresivo, la imposición de las negociaciones colectivas e incluso, como sucedió en la Alemania Occidental de la época, la participación de los trabajadores en la gestión de empresas. En el plano científico, Keynes representaba entonces la ortodoxia económica y Hayek, la disidencia. En el plano político, los derechos económicos y sociales (derechos al trabajo, la educación, la salud y la seguridad social, garantizados por el Estado) habían sido el instrumento privilegiado para estabilizar las expectativas de los ciudadanos y para enfrentar las fluctuaciones constantes e imprevisibles de las “señales de los mercados”. Este cambio alteraba los términos del conflicto distributivo, pero no lo eliminaba. Por el contrario, tenía todas las condiciones para instigarlo después de que el crecimiento económico de las tres décadas siguientes se atenuara. Y así sucedió.

Desde 1970, los Estados centrales han estado manejando el conflicto entre las exigencias de los ciudadanos y las exigencias del capital mediante el recurso a un conjunto de soluciones que gradualmente fueron dando más poder al capital. Primero fue la inflación (1970-1980); después, la lucha contra la inflación, acompañada del aumento del desempleo y del ataque al poder de los sindicatos (desde 1980), una medida complementada con el endeudamiento del Estado como resultado de la lucha del capital contra los impuestos, del estancamiento económico y del aumento de los gastos sociales originados en el aumento del desempleo (desde mediados de 1980), y luego con el endeudamiento de las familias, seducidas por las facilidades de crédito concedidas por un sector financiero finalmente libre de regulaciones estatales, para eludir el colapso de las expectativas respecto del consumo, la educación y la vivienda (desde mediados de 1990). Hasta que la ingeniería de las soluciones ficticias llegó a su fin con la crisis de 2008 y se volvió claro quién había ganado en el conflicto distributivo: el capital. La prueba fue la conversión de la deuda privada en deuda pública, el incremento de las desigualdades sociales y el asalto final a las expectativas de una vida digna de las mayorías (los trabajadores, los jubilados, los desempleados, los inmigrantes, los jóvenes en busca de empleo) para garantizar las expectativas de rentabilidad de la minoría (el capital financiero y sus agentes). La democracia perdió la batalla y solo evitará ser derrotada en la guerra si las mayorías pierden el miedo, se rebelan dentro y fuera de las instituciones y fuerzan al capital a volver a tener miedo, como sucedió hace sesenta años.

En los países del Sur global que disponen de recursos naturales, la situación es, por ahora, diferente. En algunos casos, por ejemplo en varios países de América Latina, hasta puede decirse que la democracia se está imponiendo en el duelo con el capitalismo, y no es por casualidad que en Venezuela y Ecuador se comenzara a discutir el tema del socialismo del siglo XXI, aunque la realidad esté lejos de los discursos. Hay muchas razones detrás, pero tal vez

la principal haya sido la conversión de China al neoliberalismo, lo que provocó, sobre todo a partir de la primera década del siglo xxi, una nueva carrera por los recursos naturales. El capital financiero encontró ahí y en la especulación con productos alimentarios una fuente extraordinaria de rentabilidad. Esto permitió que los gobiernos progresistas –llegados al poder como consecuencia de las luchas y los movimientos sociales de las décadas anteriores– pudieran desarrollar una redistribución de la riqueza muy significativa y, en algunos países, sin precedentes. Por esta vía, la democracia ganó nueva legitimidad en el imaginario popular. Sin embargo, por su propia naturaleza, la redistribución de la riqueza no puso en cuestión el modelo de acumulación basado en la explotación intensiva de los recursos naturales y, en cambio, la intensificó. Esto estuvo en el origen de conflictos –que se han ido agravando– con los grupos sociales ligados a la tierra y a los territorios donde se encuentran los recursos naturales, los pueblos indígenas y los campesinos.

En los países del Sur global, con recursos naturales pero sin una democracia digna de ese nombre, el *boom* de los recursos no trajo ningún impulso a la democracia, pese a que, en teoría, condiciones más propicias para una resolución del conflicto distributivo deberían facilitar la solución democrática y viceversa. La verdad es que el capitalismo extractivista obtiene mejores condiciones de rentabilidad en sistemas políticos dictatoriales o con democracias de bajísima intensidad (sistemas casi de partido único), donde es más fácil corromper a las élites mediante su involucramiento en la privatización de concesiones y las rentas del extractivismo. No es de esperar ninguna profesión de fe en la democracia por parte del capitalismo extractivista, incluso porque, siendo global, no reconoce problemas de legitimidad política. Por su parte, la reivindicación de la redistribución de la riqueza por parte de las mayorías no llega a ser oída por falta de canales democráticos y por no contar con la solidaridad de las reducidas clases medias urbanas que reciben las migajas del rendimiento extractivista. Las poblaciones más directamente afectadas por el extractivismo son los indígenas y campesinos, en cuyas tierras están los yacimientos mineros o donde se pretende instalar la nueva economía agroindustrial. Son expulsados de sus tierras y sometidos al exilio interno. Siempre que se resisten son violentamente reprimidos y su resistencia es tratada como un caso policial. En estos países, el conflicto distributivo no llega siquiera a existir como problema político.

De este análisis se concluye que la actual puesta en cuestión del futuro de la democracia en Europa del sur es la manifestación de un problema mucho más vasto que está aflorando en diferentes formas en varias regiones del mundo. Pero, así formulado, el problema puede ocultar una incertidumbre mucho mayor que la que expresa. No se trata solo de cuestionar el futuro de la democracia. Se trata, también, de cuestionar la democracia del futuro. La democracia liberal fue históricamente derrotada por el capitalismo y no parece

que la derrota sea reversible. Por eso, no hay que tener esperanzas de que el capitalismo vuelva a tenerle miedo a la democracia liberal, si alguna vez lo tuvo. La democracia liberal sobrevivirá en la medida en que el capitalismo global se pueda servir de ella. La lucha de quienes ven en la derrota de la democracia liberal la emergencia de un mundo repugnantemente injusto y descontroladamente violento debe centrarse en buscar una concepción de la democracia más robusta, cuya marca genética sea el anticapitalismo. Tras un siglo de luchas populares que hicieron entrar el ideal democrático en el imaginario de la emancipación social, sería un grave error político desperdiciar esa experiencia y asumir que la lucha anticapitalista debe ser también una lucha antidemocrática. Por el contrario, es preciso convertir el ideal democrático en una realidad radical que no se rinda ante el capitalismo. Y como el capitalismo no ejerce su dominio sino sirviéndose de otras formas de opresión, principalmente del colonialismo y el patriarcado, esta democracia radical, además de anticapitalista, debe ser también anticolonialista y antipatriarcal. Puede llamarse revolución democrática o democracia revolucionaria –el nombre poco importa–, pero debe ser necesariamente una democracia posliberal, que no puede perder sus atributos para acomodarse a las exigencias del capitalismo. Al contrario, debe basarse en dos principios: la profundización de la democracia solo es posible a costa del capitalismo; y en caso de conflicto entre capitalismo y democracia, debe prevalecer la democracia real.

Segundo: ¿ecología o extractivismo?

En el apartado anterior afirmé que al inicio del tercer milenio las izquierdas se debaten entre dos desafíos principales: la relación entre democracia y capitalismo; y el crecimiento económico infinito (capitalista o socialista) como indicador básico de desarrollo y progreso. En este texto voy a centrarme en el segundo desafío.

Antes de la crisis financiera, Europa era la región del mundo donde los movimientos ambientalistas y ecológicos tenían más visibilidad política y donde la narrativa de la necesidad de complementar el pacto social con el pacto natural parecía gozar de una gran aceptación pública. Sorprendentemente o no, con el estallido de la crisis estos movimientos y esta narrativa desaparecieron de la escena política y las fuerzas políticas más directamente opuestas a la austeridad financiera reclaman crecimiento económico como única solución, y excepcionalmente hacen alguna declaración algo ceremonial sobre la responsabilidad ambiental y la sostenibilidad. De hecho, las inversiones públicas en energías renovables fueron las primeras sacrificadas por las políticas de ajuste estructural. Antes de la crisis, el modelo de crecimiento en vigor era el principal blanco de crítica de los movimientos ambientalistas y

ecologistas precisamente por insostenible, y por producir cambios climáticos que, según los datos la ONU, serían irreversibles a muy corto plazo, según algunos, a partir de 2015. Esta rápida desaparición de la narrativa ecológica muestra que el capitalismo no solo tiene prioridad sobre la democracia, sino también sobre la ecología y el ambientalismo.

Hoy, sin embargo, resulta evidente que, en el umbral del siglo XXI, el desarrollo capitalista toca los límites de carga del planeta Tierra. En los últimos meses se han batido varios récords de peligro climático en Estados Unidos, la India, el Ártico, y los fenómenos climáticos extremos se repiten cada vez con mayor frecuencia y gravedad. Prueba de ello son las sequías, las inundaciones, la crisis alimentaria, la especulación con productos agrícolas, la escasez creciente de agua potable, el uso de terrenos agrícolas para agrocombustibles, la deforestación de bosques. Poco a poco se va constando que los factores de la crisis están cada vez más articulados y son, en última instancia, manifestaciones de la misma crisis, que por sus dimensiones se presenta como crisis civilizatoria. Todo está relacionado: la crisis alimentaria, la ambiental, la energética, la especulación financiera sobre las *commodities* y los recursos naturales, la apropiación y concentración de tierra, la expansión desordenada de la frontera agrícola, la voracidad de la explotación de los recursos naturales, la escasez de agua potable y su privatización, la violencia en el campo, la expulsión de poblaciones de sus tierras ancestrales para dar paso a grandes infraestructuras y megaproyectos, las enfermedades inducidas por la dramática degradación ambiental, con mayor incidencia de cáncer en determinadas zonas rurales, los organismos modificados genéticamente, el consumo de agrotóxicos, etc. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Rio+20, celebrada en junio de 2012, fue un fracaso rotundo debido a la complicidad mal disfrazada entre las élites del Norte global y las de los países emergentes para dar prioridad a los beneficios de sus empresas a costa del futuro de la humanidad.

La valoración internacional de los recursos financieros permitió en varios países de América Latina una negociación de nuevo tipo entre democracia y capitalismo. El fin (aparente) de la fatalidad del intercambio desigual (las materias primas siempre menos valoradas que los productos manufacturados) que encadenaba a los países de la periferia del sistema mundial al desarrollo dependiente permitió que las fuerzas progresistas, antes vistas como “enemigas del desarrollo”, se liberasen de este fardo histórico, transformando el *boom* en una ocasión única para llevar a cabo políticas sociales y de redistribución de la renta. Las oligarquías y, en algunos países, sectores avanzados de la burguesía industrial y financiera altamente internacionalizados, perdieron buena parte del poder político gubernamental, pero a cambio vieron aumentado su poder económico. Los países cambiaron sociológica y políticamente hasta el punto de que algunos analistas vieron el surgimiento de un nuevo régimen

de acumulación, más nacionalista y estatista: el neodesarrollismo basado en el neoextractivismo.

Sea como sea, este neoextractivismo tiene como base la explotación intensiva de los recursos naturales y plantea, en consecuencia, el problema de los límites ecológicos (por no hablar de los límites sociales y políticos) de esta nueva (vieja) fase del capitalismo. Esto resulta más preocupante en cuanto que este modelo de “desarrollo” es flexible en la distribución social, pero rígido en su estructura de acumulación. Las locomotoras de la minería, del petróleo, del gas natural, de la frontera agrícola son cada vez más potentes y todo lo que interfiera en su camino y complique el trayecto tiende a ser aniquilado como obstáculo al desarrollo. Su poder político crece más que su poder económico, la redistribución social de la renta les confiere una legitimidad política que el anterior modelo de desarrollo nunca tuvo, o solo tuvo en condiciones de dictadura.

Dado su atractivo, estas locomotoras son magníficas para convertir las señales cada vez más perturbadoras de la inmensa deuda ecológica y social que crean en un coste inevitable del “progreso”. Por otro lado, privilegian una temporalidad afín a la de los gobiernos: el *boom* de los recursos no va a durar siempre, y eso hay que aprovecharlo al máximo en el menor espacio de tiempo. El brillo del corto plazo ofusca las sombras del largo plazo. Mientras que el *boom* configure un juego de suma positiva, cualquiera que se interponga en su camino es visto como ecologista infantil, campesino improductivo o indígena atrasado de los que a menudo se sospecha que se trata de “poblaciones fácilmente manipulables por Organizaciones No Gubernamentales a saber al servicio de quién”.

En estas condiciones, resulta difícil activar principios de precaución o lógicas a largo plazo. ¿Qué sucederá cuando termine el *boom* de los recursos? ¿Cuando sea evidente que la inversión en “recursos naturales” no fue debidamente compensada por la inversión en “recursos humanos”? ¿Cuando no haya dinero para generosas políticas compensatorias y el empobrecimiento súbito cree un resentimiento difícil de manejar en democracia? ¿Cuando los niveles de enfermedades ambientales sean inaceptables y sobrecarguen los sistemas públicos de salud hasta volverlos insostenibles? ¿Cuando la contaminación de las aguas, el empobrecimiento de las tierras y la destrucción de los bosques sean irreversibles? ¿Cuando las poblaciones indígenas, quilombolas y ribereñas expulsadas de sus tierras cometan suicidios colectivos o deambulen por las periferias urbanas reclamando un derecho a la ciudad que siempre les será negado? La ideología económica y política dominante considera estas preguntas escenarios distópicos exagerados o irrelevantes, frutos del pensamiento crítico entrenado para pronosticar malos augurios. En suma, un pensamiento muy poco convincente y en absoluto atractivo para los grandes medios.

En este contexto, solo es posible perturbar el automatismo político y económico de este modelo mediante la acción de movimientos sociales y organi-

zaciones lo suficientemente valientes para dar a conocer el lado destructivo sistemáticamente ocultado de este modelo, dramatizar su negatividad y forzar la entrada de esta denuncia en la agenda política. La articulación entre los diferentes factores de la crisis deberá llevar urgentemente a la articulación entre los movimientos sociales que luchan contra ellos. Es un proceso lento en el que la historia particular de cada movimiento todavía pesa más de lo que debería, aunque ya son visibles articulaciones entre luchas por los derechos humanos, la soberanía alimentaria, contra los agrotóxicos, los transgénicos, la impunidad de la violencia en el campo, la especulación financiera con los alimentos, luchas por la reforma agraria, los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales, los derechos indígenas y quimbolas, el derecho a la ciudad, el derecho a la salud, luchas por la economía solidaria, la agroecología, la gravación de las transacciones financieras internacionales, la educación popular, la salud colectiva, la regulación de los mercados financieros, etcétera.

Al igual que ocurre con la democracia, solo una conciencia y una acción ecológica robusta y anticapitalista pueden enfrentar con éxito la vorágine del capitalismo extractivista. Al “ecologismo de los ricos” hay que contraponer el “ecologismo de los pobres”, basado en una economía política no dominada por el fetichismo del crecimiento infinito y del consumismo individualista, sino en las ideas de reciprocidad, solidaridad y complementariedad, vigentes tanto en las relaciones entre los seres humanos como en las relaciones entre los humanos y la naturaleza.